

PENAL . CONDENADO IMPAGO PENSIÓN DE ALIMENTOS. El padre tenía ingresos y durante unos años no ingreso nada y otros años unos meses y otros meses no. La condena se basa en **De todo ello se desprende una indiferencia por parte del acusado al cumplimiento de esa obligación de la pensión alimenticia a favor de sus hijos menores, cuando tenía posibilidades para, al menos, no dejar desatendidas por completo las mensualidades** indicadas, lo cual revela una voluntad de impagar la prestación debida

Sin embargo, la Juez de lo penal llega a la conclusión de que el acusado tenía capacidad económica suficiente, a lo largo de esos años, para haber atendido esa prestación alimenticia, convicción que obtiene mediante una inferencia lógica y bien fundamentada de los elementos probatorios obrantes en autos.

La Sra. Caridad afirmó que su ex marido ha estado trabajando siempre, aunque no de forma continua, fundamentalmente en la hostelería.

El propio acusado reconoce que en 2018, 2019 y también en el 2020 y 2021 ha trabajado en restaurantes (primero en DIRECCION000 y luego en DIRECCION001) aunque de manera discontinua, haciendo extras de fin de semana, ganando unos 800 euros al mes.

Ello viene corroborado por la documentación sobre vida laboral, prestaciones y averiguación de bienes de Sr. Domingo ; extremo que ha sido analizado por la juzgadora indicando que esta información revela que ha estado alternando periodos de alta laboral con otros en los que percibió la prestación por desempleo, obteniendo

- en el 2018 unos ingresos anuales cercanos a los 10.000 euros,
- en el año 2019 unos ingresos sobre los 7.500 euros.

Así mismo, se advierte -como señala la sentencia- **que el acusado no ajustaba sus gastos (especialmente el alquiler por un piso en el centro de Valladolid) a las necesidades alimenticias de los hijos y luego, cuando se cambia a una vivienda con un alquiler más barato y asequible, sigue sin abonar las pensiones alimenticias.**

**Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 3 de noviembre 2023.
Número Sentencia: 164/2023 Número Recurso: 511/2023 Numroj: SAP VA 1724/2023 Ponente: Miguel Ángel de la Torre Aparicio Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 2 de VALLADOLID Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000027 /2022**

Jurisdicción: Penal

Ponente: [Miguel Ángel de la Torre Aparicio](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 03/11/2023

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Segunda

Número Sentencia: 164/2023

Número Recurso: 511/2023

Numroj: SAP VA 1724/2023

Ecli: ES:APVA:2023:1724

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

VALLADOLID

SENTENCIA: 00164/2023

-

C/ ANGUSTIAS S/N (PALACIO DE JUSTICIA)

Teléfono: 983 413475-3459555

Correo electrónico: audiencia.s2.valladolid@justicia.es

Equipo/usuario: MMF

Modelo: SE0200

N.I.G.: 47186 43 2 2021 0008350

RP APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000511 /2023

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 2 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000027 /2022

Delito: IMPAGO DE PENSIONES

Recurrente: Domingo

Procurador/a: D/D^a CRISTINA BAJENETA MARTIN

Abogado/a: D/D^a YOLANDA DIEZ LAVIN

Recurrido: MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: D/D^a

Abogado/a: D/D^a

SENTENCIA N° 164/2023

Ilmos. Sres. Magistrados D./Dª :

D. MIGUEL DONIS CARRACEDO

D. MIGUEL-ANGEL DE LA TORRE APARICIO

Dña. MARIA LOURDES DEL SOL RODRIGUEZ

En VALLADOLID, a tres de noviembre de dos mil veintitrés.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha visto el presente Rollo RP 511/2023, dimanante del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado n° 27/2022 del Juzgado de lo Penal n° 2 de Valladolid, seguido contra Domingo por delito de impago de pensiones alimenticias.

Han sido partes en esta segunda instancia:

- Como apelante: El referido acusado, Domingo , representado por la procuradora Sra. Bajeneta Martín y defendido por la letrada Sra. Díez Lavín.
- Como apelada: El Ministerio Fiscal en la representación que le es propia. Y como acusación particular Caridad, representada por el procurador Sr. González Forjas y asistida por el letrado Muelas Ares.

Es Ponente el Ilmo. Magistrado D. Miguel Ángel de la Torre Aparicio.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Penal n° 2 de Valladolid, con fecha 10 de abril de 2023 se dictó Sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso, declarando probados los siguientes hechos: "UNICO. - El día 31 de mayo de 2018 se dictó Sentencia por el Juzgado de Violencia sobre la mujer n° 1 de Valladolid en la que se establecía que el acusado Domingo , mayor de edad y sin antecedentes penales computables, debía abonar a Caridad la cantidad mensual de 200 euros en concepto de pensión de alimentos para sus dos hijos menores de edad.

El acusado ha incumplido tal obligación y únicamente ha abonado en

- el año 2018: 140 euros en octubre y 80 euros en diciembre de 2018; e
- n el año 2019: 70 euros en abril, 40 euros en mayo, 100 euros en julio, 40 euros en octubre y 50 euros en noviembre;
- y en el año 2020: 2050 euros en marzo, 150 euros en abril, 70 euros en julio, 150 euros en septiembre y 30 euros en octubre,
- no habiendo abonado tampoco la cuantía mensual de las pensiones devengadas en el año 2021, pese a tener capacidad económica suficiente."

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo condenar y condeno a Domingo , como autor criminalmente responsable de un delito de abandono de familia en la modalidad de impago de pensiones, ya definido, a la pena

- de SEIS MESES de PRISIÓN
- e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de condena,
- y a que indemnice a Caridad , por el importe de las pensiones o fracción de las mismas no abonadas entre mayo de 2018 y enero de 2022, -es decir, el periodo comprendido entre el momento en que dicta la sentencia de divorcio y el del auto de apertura del juicio oral- excluyendo de la cantidad resultante las cantidades que, según se determine en ejecución de sentencia, se hayan hecho efectivas por el acusado en el periodo indicado, cantidad que devengará el oportuno interés legal; todo ello con expresa condena al acusado al pago de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular."

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal del acusado Sr. Domingo , que fue admitido a trámite en ambos efectos y, practicados los traslados oportunos, se presentó escrito de impugnación por el Ministerio Fiscal. Elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

HECHOS PROBADOS Se aceptan los hechos probados de la sentencia de instancia, que se dan por reproducidos con la única corrección material de que en el segundo párrafo, donde dice: "..y en el año 2020: 2050 euros en marzo.."; debe decir: ..y en el año 2020: 250 euros en marzo, ...".

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal en el presente procedimiento condena a Domingo como autor de un delito de abandono de familia en la modalidad de impago de pensiones, tipificado en el artículo 227 del Código Penal, a la pena de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de condena, y a indemnizar a Caridad en las cantidades que se especifican en el fallo de la citada resolución.

Contra ella, se formula el presente recurso de apelación por la defensa del Sr. Domingo solicitando se revoque el pronunciamiento de condena y se dicte nueva sentencia que le absuelva del delito por el que se le acusa. El Ministerio Fiscal se opone al recurso interesando la confirmación de la resolución de instancia.

SEGUNDO.- Como primer motivo de impugnación se alega error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia (artículo 24 de la Constitución), al entender que no hay prueba suficiente que acredite el elemento objetivo y subjetivo del delito de abandono de familia en la modalidad de impago de pensiones y, por lo tanto, no se puede dar por probada la participación del acusado en dicha infracción penal.

El derecho de presunción de inocencia, recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos.

En cualquier caso, al tribunal de apelación no le corresponde efectuar una nueva apreciación de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial de instancia alcanza su íntima convicción, sustituyendo la función exclusiva que a estos les atribuye el art. 117.3 CE y a las facultades valorativas que les reconoce el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta.

En definitiva, nuestro ámbito de revisión se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el órgano sentenciador, en sí misma considerada, es lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos -(SSTC 68/98, 85/99, 117/2000, 4 de Junio de 2001 o 28 de Enero de 1002, o de esta Sala 1171/2001, 6/2003, 220/2004, 711/2005, 866/2005, 476/2006, 528/2007 entre otras-.) Así mismo, resulta conveniente recordar la doctrina consolidada, emanada de las Audiencias Provinciales, de que cuando la cuestión debatida en la apelación es la valoración de la prueba realizada por el Juzgador de instancia, debe partirse, como regla general, de la privilegiada posición de la que goza este para apreciar la prueba desarrollada en su presencia en el seno del juicio oral (núcleo del proceso penal), por cuanto es en este momento en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (artículo 24-2 de la Constitución Española); ventajas de las que carece el tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que, como ha puesto de relieve la jurisprudencia, de forma unánime, esta facultad de valorar libremente las pruebas practicadas en el juicio de la que disfruta el Juez a quo, en base al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo cabe ser modificada cuando resulte contraria a la presunción de inocencia por no existir el correspondiente soporte probatorio, o bien cuando no se razona o motiva adecuadamente dicho proceso valorativo o finalmente cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones evidencia un manifiesto y diáfano error del juzgador a quo de tal magnitud y claridad que hace necesario, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Examinadas las actuaciones bajo estos parámetros, comprobamos que la Juez de lo Penal ha contado con pruebas aptas y suficientes para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia.

El testimonio (obranste al acontecimiento 2 y 77 del visor) de la sentencia firme, de fecha 31 de mayo de 2018, dictada en el juicio de divorcio nº 18/2018 del Juzgado de violencia sobre la mujer de Valladolid, que aprueba el convenio regulador entre los cónyuges, acredita la obligación de Domingo de abonar la cantidad de 200 euros mensuales como pensión de alimentos para sus hijos menores (100 euros por cada hijo).

El impago de esta pensión alimenticia que se refleja en hechos probados también queda demostrado a través de la denuncia presentada y el escrito (acontecimiento 98) donde consta una relación detallada desglosando los meses en que el acusado realizaba pagos parciales de cantidades exiguas, a lo largo de los años a que se circunscribe este enjuiciamiento; de la declaración de la denunciante a la que se confiere credibilidad; así como de la documentación sobre la ejecución forzosa en el Juzgado de violencia sobre la mujer (acontecimientos 55 a 75).

El acusado no niega ni discute los impagos que son objeto de la denuncia, manifestando esencialmente que se han debido a que carecía de medios económicos, que no le llegaba el dinero para hacer frente a dicha pensión.

Sin embargo, la Juez de lo penal llega a la conclusión de que el acusado tenía capacidad económica suficiente, a lo largo de esos años, para haber atendido esa prestación alimenticia, convicción que obtiene mediante una inferencia lógica y bien fundamentada de los elementos probatorios obrantes en autos.

La Sra. Caridad afirmó que su ex marido ha estado trabajando siempre, aunque no de forma continua, fundamentalmente en la hostelería.

El propio acusado reconoce que en 2018, 2019 y también en el 2020 y 2021 ha trabajado en restaurantes (primero en DIRECCION000 y luego en DIRECCION001) aunque de manera discontinua, haciendo extras de fin de semana, ganando unos 800 euros al mes.

Ello viene corroborado por la documentación sobre vida laboral, prestaciones y averiguación de bienes de Sr. Domingo ; extremo que ha sido analizado por la juzgadora indicando que esta información revela que ha estado alternando periodos de alta laboral con otros en los que percibió la prestación por desempleo, obteniendo

- en el 2018 unos ingresos anuales cercanos a los 10.000 euros,
- en el año 2019 unos ingresos sobre los 7.500 euros.

Así mismo, se advierte -como señala la sentencia- **que el acusado no ajustaba sus gastos (especialmente el alquiler por un piso en el centro de Valladolid) a las necesidades**

alimenticias de los hijos y luego, cuando se cambia a una vivienda con un alquiler más barato y asequible, sigue sin abonar las pensiones alimenticias.

En base a tales datos, resulta razonable colegir, como hace la Juzgadora, que el acusado no carecía de todo tipo de recursos sino que tenía una capacidad económica **que le permitía afrontar esa pensión y, en todo caso, que no justifica la falta de pago total durante muchos meses:** e

- en el 2021 no hizo ningún pago;
- en el 2020 no abonó ninguna cantidad en enero, febrero, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre;
- en el 2019 dejó de pagar los meses de enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre y diciembre;
- y en el 2018 no abonó los meses de junio, julio, agosto, septiembre y noviembre.

De todo ello se desprende una indiferencia por parte del acusado al cumplimiento de esa obligación de la pensión alimenticia a favor de sus hijos menores, cuando tenía posibilidades para, al menos, no dejar desatendidas por completo las mensualidades indicadas, lo cual revela una voluntad de impagar la prestación debida.

En consecuencia, consideramos que existe una actividad probatoria de signo incriminatorio que es idónea y bastante para enervar el derecho a la presunción de inocencia y que ha sido valorada por la Juzgadora de forma correcta, ajustándose a principios lógicos y racionales, así como a las máximas de experiencia, sin que se advierta error o equivocación en sus apreciaciones fácticas o jurídicas.

TERCERO.- El segundo motivo de recurso consiste en invocar infracción legal por aplicación indebida del artículo 227 del Código Penal y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta; motivo que debe correr igual suerte desestimatoria.

En efecto, partiendo de los hechos probados, que se mantienen íntegramente en esa alzada conforme hemos expuesto en el precedente fundamento, se observa la concurrencia de todos y cada uno de los elementos típicos que configuran el delito de abandono de familia, en la modalidad de impago de pensiones, previsto y penado en el artículo 227 del Código Penal, a saber: A) La existencia de una resolución judicial firme, en un supuesto de separación matrimonial, divorcio o nulidad, que establece la obligación del acusado de abonar una prestación económica, en este caso de 200 euros mensuales, a favor de los hijos menores en concepto de alimentos; como es la referida sentencia del Juzgado de violencia sobre la mujer de Valladolid de 31 de mayo de 2018.

B) La conducta omisiva del acusado consistente en el impago reiterado de dicha prestación económica durante los plazos que marca el precepto legal: dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, según se recoge en la descripción que se hace en el factum probatorio que es reflejo de la prueba practicada.

C) En cuanto al elemento subjetivo, resulta igualmente acreditado que el acusado conocía la resolución judicial que le imponía la prestación y ha dejado de pagar muchas mensualidades (véase que en el año 2021 no realiza ningún abono) a pesar de que no se

hallaba en una situación de imposibilidad económica de afrontar esa prestación alimenticia, de forma que quedaba a su libérrima voluntad el pagar alguna cantidad o no abonarla, configurándose así el dolo de incumplir esta obligación que es de carácter preferente.

CUARTO.- Todo lo anteriormente expuesto conduce a la desestimación del recurso, debiendo declararse de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Domingo , se confirma la sentencia de fecha 10 de abril de 2023, dictada en el Procedimiento abreviado nº 27/2022 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid, declarándose de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación por INFRACCIÓN DE LEY del motivo previsto en el nº 1 del art. 849 LECrim., ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá prepararse ante este Tribunal en el término de CINCO DÍAS siguientes al de su notificación.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.